

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 24º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-7157-2023
CARATULADO	: MONSALVE/FISCO DE CHILE - SEREMI DE
SALUD DEL BIO BIO	

Santiago, treinta y uno de Enero de dos mil veinticuatro

## VISTOS.

Con fecha 1 de mayo de 2023, al folio 1, don Nicolás Alberto Leal Sepúlveda, abogado y don Eduardo Armando García Ramos, abogado, en representación de don **Rubén Eugenio Segundo Monsalve Lagos**, pensionado, casado, todos con domicilio en calle Bandera, número 236 Subterráneo, comuna de Santiago, interponen demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado en contra del **Fisco de Chile**, representado legalmente por don Raúl Letelier Wartenberg, abogado, Presidente del Consejo de Defensa del Estado, ambos con domicilio en Santiago, calle Agustinas N°1.687, comuna de Santiago.

Fundan su pretensión en que el demandante se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, establecida por el Decreto Supremo N°1.040, del año 2003, Ministerio del Interior, conocida como Comisión Valech I, bajo el número 15.382 en dicho listado.

Relatan sobre lo sucedido a don Rubén Eugenio Segundo Monsalve Lagos, que en el año 1973 tenía 21 años, vivía junto a sus padres, trabajaba en dibujo técnico arquitectónico y tenía una hija de 2 años, la cual vivía con su pareja de aquella época.



«RIT»

Foja: 1

Rememoran que el día 11 de septiembre de 1973, siendo aproximadamente las 10:00 de la mañana, cuando se encontraba en el paradero 21 Sta. Rosa, comuna de La Granja, Carabineros se acercaron a él y sin preguntarle nada, le dieron un fuerte golpe con la culata de sus armas, subiéndolo a golpes a un micro, donde permaneció por muchas horas, pasando por el liceo 12, donde detuvieron a varios jóvenes de aquel establecimiento, siendo golpeados e insultados por carabineros.

Agregan que fueron llevados a la antigua Sub Comisaría de Carabineros de La Granja (hoy 13° Comisaría de la Granja). Donde los mantuvieron de pie por un periodo aproximado de 2 horas, luego carabineros los separó, golpeándolo en la cabeza con un culatazo, provocándole una gran hemorragia, la cual no fue atendida, quedando con un TEC abierto. Le preguntaban si sabía dónde encontrar armas y literatura de bandos políticos, a lo que respondía no saber nada, no conforme con eso, le daban golpes de pies y puños.

Añaden que al llegar la noche fue trasladado al Regimiento Tacna, donde fue amarrado de pies y manos. El día 13 de septiembre de 1973 lo trasladaron al Campamento de Prisioneros, Estadio Chile, donde fue dejado en una cancha, en la cual debían dormir a la intemperie, agregando que se llevaban a los prisioneros a una casa en el interior del estadio y luego no aparecían más. Estando allá no les dieron de comer ningún día, pasando mucho frío, los militares eran muy crueles y los trataban como unos verdaderos animales.

Refieren que el día 19 de septiembre de 1973, fue trasladado al Estadio Nacional de Santiago, donde los golpes siguieron, todos los días sacaban personas, las cuales nunca volvían, hacían simulacros de fusilamientos donde los golpes fueron indescriptibles



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XCNNXLWXNCX

«RIT»

Foja: 1

y de gran daño como para mencionar. La imagen que nunca se le ha borrado fue ver pasar el tractor dentro del estadio con las ruedas llenas de sangre humana. Le pegaban con lumas, golpes de pies y puños, así como culatazos. Los militares lo trataban de comunista, cuando lo interrogaban le vendaban los ojos y ponían focos en la cara.

Mencionan que durante toda su detención estuvo totalmente incomunicado. Finalmente, el día 04 de diciembre de 1973 le dieron la libertad, dándole los militares una hora para llegar a su casa. Al llegar, sus padres se pusieron a llorar, dado que pensaban que estaba muerto, puesto que la gente decía que lo habían tirado en un saco a la carretera.

Exponen que no podía salir de la casa, sentía miedo y le daban fuertes crisis de pánico. Civiles lo seguían a todos lados y le daba miedo ir a visitar a su pareja e hija, puesto que siempre suponía que las iba a poner en riesgo.

Indican que quedó con tantos traumas que su pareja lo dejó. Tenía pesadillas y hablaba solo, debiendo tomar medicamentos para dormir. El no encontrar trabajo lo desesperaba, puesto que tenía una hija a la cual alimentar y sus recursos eran limitados, se puso irritable y no quería que nadie le hablara, le daban fuertes dolores de cabeza y por culpa del TEC abierto comenzó a tener pérdida de visión. Luego se puso a trabajar de manera independiente y todo lo que ganaba debía invertirlo en su salud, dejando a su hija totalmente de lado.

Narran que en la actualidad tiene 71 años, que los sucesos de aquella época le provocaron un gran cambio de personalidad, dado que era un joven empático y cariñoso con su familia y desde aquel entonces se convirtió en un hombre apático e irritable, una persona nerviosa y muy temerosa, que no expresa cariño a nadie.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XCNNXLWXNCX

«RIT»

Foja: 1

Invocan para su pretensión lo previsto en los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 19, 38 de la Constitución Política de la República; Ley 18.575; artículos 27 y 28 de la Convención de Viena; artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 3.K, 16, 17, 32, 44, 45, 46 y 136 de la Carta de la Organización de los Estado Americanos.

Rechazan la aplicación de normas y principios del derecho interno a los casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, pues, la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícito queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar disposiciones de Derecho Interno, destacando el carácter consuetudinario de estas normas y que atendida su naturaleza no son creadas sino simplemente reconocidas por los Estados, de lo que deriva su ineludible aplicación, de manera tal que produciéndose un hecho ilícito imputable a un Estado la responsabilidad de éste surge de inmediato por la violación de la norma de Derecho Internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias indeseadas.

Citan una serie de jurisprudencia de la E. Corte Suprema y doctrina, que avalaría su pretensión, la cual reproduce en lo pertinente en su libelo.

Aluden, también, fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que obligarían al Estado a no aplicar la prescripción en material civil, en casos de pretensiones indemnizatorias vinculadas a violaciones a los derechos humanos.

Reclaman que existe un daño moral para el demandante principal, por las graves violaciones a los derechos humanos de que fue objeto el demandante, que se ha manifestado en un gran daño a su vida emocional y personal, como consecuencia directa



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XCNNXLWXNCX

«RIT»

Foja: 1

de las torturas sufridas durante su detención ilegal y prisión política de la que fue objeto, avaluando su perjuicio moral en la suma de \$200.000.000 o la suma que se determine conforme a derecho, con reajustes, intereses y costas.

Con fecha 5 de septiembre de 2023, la folio 9, contesta la demanda el Fisco de Chile, solicitando su rechazo, con costas, o en subsidio, se rebaje sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido, con fundamento, en primer lugar, en la excepción de reparación integral, por haber resultado ya indemnizado el actor, dado que conforme al ámbito de la llamada justicia transicional, se establecieron medios de reparación, por los cuales el Estado ha desembolsado a diciembre de 2019, en concepto de Pensiones: la suma de \$247.751.547.837, como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936, como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech); Bonos: la suma de \$41.910.643.367, asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737, por la ya referida Ley 19.992; Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123, Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737, en consecuencia, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400, entre los cuales, se concedió a la demandante una pensión al amparo de la Ley N°19.992, anual y reajutable de \$1.353.798, para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284, para beneficiarios de 70 o más años y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años, adicionalmente un aporte único de reparación Ley N°20.874 de \$1.000.000. Se agrega que concedieron otros derechos, como gratuidad en prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), en los servicios de salud del país, con



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XCNNXLWXNCX

«RIT»

Foja: 1

la sola inscripción en la correspondiente oficina, cuyo programa cuenta con equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del programa, que incluye apoyo técnico y rehabilitación física, cuyo presupuesto, el año 2020, alcanzó a la cantidad de M\$6.543.883; en el ámbito educacional, se concedieron becas de estudios superiores y gratuidad en educación básica y media; y beneficios en vivienda a través de subsidios.

Indica que lo anterior, es sin perjuicio, de las reparaciones simbólicas, como actos positivos de reconocimiento, dirigidos esencialmente, a reducir el daño moral padecido por las víctimas de violaciones a los derechos humanos, como lo son un memorial en el Cementerio General en Santiago; el establecimiento del Día Nacional del Detenido Desaparecido, fijado para el 30 de agosto de cada año; la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; establecimiento del Premio Nacional de los Derechos Humanos; y la construcción de diversos memoriales y obras a lo largo del país, todo lo cual ha implicado grandes gastos económicos del Estado.

Expresa que la Corte Interamericana de Justicia ha valorado el esfuerzo del Estado de Chile, en su política de reparación de violaciones a los derechos humanos e, incluso, ha rechazado pretensiones indemnizatorias de personas que ya han recibido beneficios del Estado por ese motivo.

Alega que por lo demás, resultaría incompatible la pretensión indemnizatoria del actor, con los beneficios establecidos en la Ley N°19.123 y evitar así, también, un sistema compensatorio que no genere desigualdades.

Opuso, además, en subsidio de la anterior, la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida, la que sustentó en lo



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XCNNXLWXNCX

«RIT»

Foja: 1

previsto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación al artículo 2497 del mismo cuerpo legal, considerando que aún, pudiendo entenderse suspendida la acción durante la dictadura militar, por imposibilidad de la víctima de poder ejercer dicha acción, igualmente desde la restauración de la democracia a la fecha de notificación de la demanda producida el 14 de agosto de 2023, habría transcurrido en exceso el plazo de prescripción, como también, el plazo de extinción ordinaria del artículo 2.332 del Código Civil.

Aduce en subsidio, en caso que se estime que la norma anterior no sería aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de las acción civil que contesto, habría transcurrido con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

Expresa que la imprescriptibilidad es una cuestión extraordinaria y requiere, siempre, de declaración explícita, que en el caso no existiría, además, que la indemnización, en caso alguno, puede tener un carácter punitivo, ni de desigualdad, precisando que ninguno de los instrumentos internacionales de derechos humanos aludidos por el actor establecen la imprescriptibilidad de acciones patrimoniales derivadas de delitos de lesa humanidad, ni prohíben la aplicación del derecho interno, citando y reproduciendo al efecto un fallo de la Corte Suprema de unificación de jurisprudencia, de 21 de enero de 2013.

Alega, por otra parte, que la indemnización pretendida resultaría excesiva, la cual no puede constituir una fuente de lucro



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XCNNXLWXNCX

«RIT»

Foja: 1

o ganancia, debiendo el tribunal, en subsidio, regular el daño moral, considerando los pagos ya recibidos del Estado, sin atender a la capacidad económica del mismo.

En cuanto al pago de reajustes e intereses, hizo presente que solo procederían una vez que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, dado que solamente en esa época se establecería la obligación.

Con fecha 15 de septiembre de 2023, al folio 15, replica el actor, ratificando lo expresado en su demanda y señalando, respecto de la excepción de reparación integral, que las pensiones de reparación con arreglo a las leyes N°19.992 que estableció medidas de reparación para las personas calificadas como víctimas de prisión política y tortura, y sus modificaciones y la Ley N°20.874, no son óbice para que se indemnice mediante un monto fijado por un tercero imparcial, que es un tribunal de la República.

En cuanto a la prescripción, reiteró su alegación de la supuesta imprescriptibilidad de la acción civil deducida, precisando la acción tendría carácter constitucional, reproduciendo los argumentos de su demanda.

En lo pertinente al monto indemnizatorio solicitado, indica que estaría totalmente ajustado a la justicia. Por su parte, en cuanto a los reajustes e intereses demandados, señala que estarían conforme a derecho.

Con fecha 27 de septiembre de 2023, al folio 17, duplica la demandada, reiterando lo expresado en su contestación aludiendo y reproduciendo una sentencia dictada el 21 de enero de 2013, por la Excm. Corte Suprema, en los autos caratulados “Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno” y reproduciendo parte de sentencia de 16 de marzo de 2016.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XCNNXLWXNCX



«RIT»

Foja: 1

Con fecha 31 de octubre de 2023, al folio 23, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que obra en autos.

Con fecha 25 de enero de 2024, al folio 34, se citó a las partes para oír sentencia.

### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, don Nicolás Alberto Leal Sepúlveda, abogado y don Eduardo Armando García Ramos, abogado, en representación de don Rubén Eugenio Segundo Monsalve Lagos, interponen demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por don Raúl Letelier Wartenberg, abogado, Presidente del Consejo de Defensa del Estado, por el daño que habría padecido con ocasión de los hechos cometidos por agentes del Estado, relatados en su libelo, avaluando su perjuicio moral en la suma de \$200.000.000, o la suma que se determine conforme a derecho, con reajustes, intereses y costas.

Fundan su pretensión en que el demandante se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, establecida por el Decreto Supremo N°1.040, del año 2003, Ministerio del Interior, conocida como Comisión Valech I, bajo el número 15.382 en dicho listado y en los argumentos de hecho y fundamentos de derecho relatados latamente en lo expositivo del presente fallo.

**SEGUNDO:** Que han resultado hechos no controvertidos en el proceso, aceptados por ambas partes, que el actor, don *Rubén Eugenio Segundo Monsalve Lagos*, corresponde efectivamente una víctima de violación de derechos humanos durante el desarrollo de la Dictadura Militar, y que el Estado ha



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XCNNXLWXNCX

«RIT»

Foja: 1

efectuado acciones de reparación, mediante pensiones asistenciales y simbólicas.

**TERCERO:** Que la discusión esencial del pleito judicial, ha rondado en cuanto a si las acciones de reparación efectuadas por el Estado habrían sido suficientes para reparar el daño sufrido por el actor; en si la acción deducida se encontraría prescrita; como también, en si la pretensión indemnizatoria del actor resultaría desproporcionada, relacionado ello con la extensión que habría tenido el daño moral que padeció aquella.

Conforme al silencio de la demandada y del actor, en su caso, deben estimarse controvertidos, además, los alcances de los apremios que habría padecido el actor en los periodos en que estuvo detenido por agentes militares, y las secuelas físicas que se habrían derivado de éstos.

**CUARTO:** Que el actor rindió la siguiente prueba documental, a fin de justificar sus argumentos:

1) Copia Digital de Nómina de casos de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos Reconocidos por la Comisión. Valech I, agregada a folio 1.

2) Informe del Programa de Asistencia Integral de Salud, PRAIS, del Ministerio de Salud, denominado Norma técnica para la atención de salud de personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el periodo 1973-1990, agregado al folio 25.

3) Copia digital timbrada de carpeta confidencial del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) correspondiente al demandante de autos don Rubén Eugenio Segundo Monsalve Lagos, donde se acreditaría su calidad de víctima de violaciones de derechos humanos por parte del demandado de autos, Estado de Chile, agregada al folio 25.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XCNNXLWXNCX

«RIT»

Foja: 1

4) Informe Psicológico sobre los efectos de la prisión política y tortura padecida por el demandante de autos, Rubén Eugenio Segundo Monsalve Lagos, elaborado y suscrito por el Psicólogo Clínico de PRAIS, don Miguel Ángel Varas Mendoza, del Servicio de Salud Metropolitano Sur, de fecha 21 de agosto del 2023, agregada al folio 25.

5) Fallo de casación en Episodio “Comando Conjunto, víctimas: Salinas, Pacheco y Gianelli. Rol N° 5831-2013, agregado al folio 26.

6) Fallo de casación en Episodio “Torres de San Borja”, víctimas: Montecinos Slaughter, Adler Zulueta, Díaz Agüero, y otros. Rol N° 2918-2013, agregado al folio 26.

7) Fallo causa “Marccone con Fisco de Chile”, Rol 22856-2015, de fecha 29 de Diciembre de 2015, agregado al folio 26.

8) Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 29 de noviembre de 2018, en causa caratulada “Órdenes Guerra y otros vs Chile”, Rol CDH-2-2017, agregada al folio 26.

9) Sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N° 1092-15, dictada el día 14 de septiembre de 2015, agregada al folio 26.

10) Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Reflexiones y Propuestas de S.E. el Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar; págs. 5 a la 10, inclusive, agregado al folio 26.

11) Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH) Capítulo V, agregado al folio 26.

12) Copia de la página N°377, del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, que da cuenta de haberse acreditado por el Estado de Chile la calidad de torturado



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XCNNXLWXNCX

«RIT»

Foja: 1

del demandante don Rubén Eugenio Segundo Monsalve Lagos, Registro de Torturados N°15.382, agregada al folio 26.

Documentos agregados legalmente al proceso y no objetados.

**QUINTO:** Que, por su parte, la demandada rindió la siguiente prueba documental para justificar sus defensas o desvirtuar los argumentos y pruebas del actor:

Copia de Oficio ORD.: DSGT N°4792-16858, de 6 de octubre de 2023, del Instituto de Previsión Social, acompañado con fecha 11 de diciembre de 2023, en folio 19, agregado legalmente al proceso y no objetado.

**SEXTO:** Que, así las cosas, corresponde valorar las probanzas rendidas por las partes, que se ha limitado a instrumentos. En este sentido, no se registran impugnaciones, fundadas en causal legal, respecto de ninguno de los que fueron puestos en conocimiento de la contraria, ni alegaciones respecto de las virtudes formales de los públicos. En consecuencia, se reconoce pleno valor probatorio a los instrumentos señalados, según su naturaleza y se tienen como instrumentos públicos en juicio, los que tengan dicha naturaleza.

**SÉPTIMO:** Que conforme a los hechos reconocidos por las partes, se debe tener como hechos justificados en el proceso, la veracidad de haber sido el actor, don *Rubén Eugenio Segundo Monsalve Lagos*, prisionero político del régimen militar en dictadura, producido con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, y víctima de violación a los derechos humanos, por torturas efectuadas por agentes de dicha Dictadura Militar; y que resulta efectivo, también, que el demandante, ha sido beneficiado con reparaciones de parte del Estado, por su calidad de víctima de torturas, recibiendo, al menos, ciertas pensiones asistenciales, lo cual se desprende del reconocimiento efectuado en el escrito de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XCNNXLWXNCX

«RIT»

Foja: 1

réplica, donde las estimó insuficientes; y que ha recibido, también, asistencia especializada, en el Programa PRAIS, dirigido a víctimas de violaciones a los derechos humanos, al menos de carácter psicológico, según consta del propio informe acompañado por ésta, en folio 25, no objetado.

**OCTAVO:** Que previo a verificar si se dan los presupuestos para acceder a la responsabilidad extracontractual del Estado, por acciones de sus agentes, deberá revisarse si se dan los presupuestos legales para acceder a la primera defensa argumentada por el Fisco de Chile, esto es, excepción de reparación integral o de pago deducida.

**NOVENO:** Que la excepción de reparación integral e improcedencia de la indemnización, deducida por la demandada se ha sustentado, esencialmente, en haberse producido una reparación del daño moral por la demandada, conforme a lo previsto en la Ley N°19.123, y en que el actor habría recibido, puntualmente, beneficios de la Ley N°19.992 sobre prisioneros y torturados políticos, en virtud de haber sido calificado como víctima de presión política y tortura del Informe de la Comisión Valech, consistente en pensión asistencial; un aporte único de reparación Ley 20.874, de \$1.000.000; además, de beneficios en derecho de gratuidad en prestaciones médicas, según Ley N°19.234, otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud, en todos los servicios de salud públicos del país, que comprenden profesionales de atención exclusiva; beneficios educacionales, consistentes en becas para la víctima, para un hijo o para un nieto de aquel; y beneficios de vivienda, correspondientes a subsidios para tal efecto.

**DÉCIMO:** Que como ya ha quedado asentado en la motivación séptima, el actor ha reconocido en juicio, en su escrito



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XCNNXLWXNCX

«RIT»

Foja: 1

de réplica, que son efectivas las prestaciones económicas que ha percibido del Estado, en su calidad de víctima de prisión política y tortura, y que por tanto, se le ha hecho pago de diversas sumas que comprenden a tales beneficios, no precisados por ella; como también, que ha recibido asistencia profesional del programa PRAIS, al menos, de carácter psicológico, todas las cuales contienen una valoración patrimonial importante, la que no ha sido precisada en juicio.

Por otra parte, conforme el mérito del informe emitido por Instituto de Previsión Social, de fecha 6 de octubre de 2023, agregado al expediente digital con fecha 11 de octubre de 2023, en folio 19, no objetado, puede establecerse por el tribunal, fehacientemente, que el actor ha percibido como beneficios de reparación de las leyes números 19.992 y 20.874, por el periodo que va de febrero de 2005 a septiembre de 2022, las sumas de \$36.473.014, por concepto de pensiones asistenciales ley 19992; de \$1.000.000, referido a aporte único Ley N°20.874; \$609.685, por concepto de aguinaldos, siendo el total percibido de \$38.082.699, correspondiendo la pensión actual a esa época a \$264.898.

**UNDÉCIMO:** Que según lo previsto en el artículo 2° de la Ley N°19.123, en su parte pertinente, se dispone: “Le corresponderá especialmente a la Corporación:

1.- Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de éstas para acceder a los beneficios contemplados en esta ley.”

De acuerdo a dicha disposición legal, resulta evidente que el objeto de las prestaciones que dicha norma contempla, están destinadas a la reparación del daño moral de las víctimas de presión política y tortura, como es el caso del actor de autos.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XCNNXLWXNCX

**DUODÉCIMO:** Que de las demás disposiciones de la citada Ley N°19.123, que se refiere a la creación de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y que establece Pensión de Reparación y otorga otros beneficios en favor de las personas que señala, resulta de manifiesto el esfuerzo que ha efectuado el Estado de Chile, para reparar, al menos en parte, el daño moral sufrido por las víctimas de tortura y prisión política durante el régimen militar, a través de la estructuración de pensiones y otros beneficios para los afectados y su grupo familiar, como también, reparaciones simbólicas, referidas a la memoria de los excesos y delitos cometidos en contra de las víctimas de torturas y prisión política de la Dictadura Militar, como memoriales, monumentos, efemérides, museos y otros.

Cabe agregar que la estructura y prestaciones disponibles para la demandante, en materia de salud y de forma preferente, a través del programa PRAIS, implican un valor monetario adicional a disposición del actor, independientemente de si ésta opta o no por ocuparlos, lo que ocurre, también, con los beneficios de educación y vivienda.

**DÉCIMO TERCERO:** Que conforme a lo asentado precedentemente y lo reconocido por el actor en el proceso, debe tenerse por efectiva la reparación integral que ha efectuado el Estado con motivo de las torturas y prisión política que padeció de parte de agentes del Gobierno Militar en Dictadura, reparación que de acuerdo a las circunstancias y la capacidad económica del Estado de Chile, debería estimarse suficiente, considerando, por una parte, que las torturas y dolor infringido al demandante, jamás podrían ser reparadas con suma alguna, pero también por otro lado, que el Estado también ha sido víctima de un gobierno de facto, que alteró la institucionalidad, precisamente, por los



«RIT»

Foja: 1

órganos llamados a defender al Estado y a las personas que lo componen.

A mayor abundamiento, debe considerarse, también, que ha sido el propio Estado de Chile, el que ha propendido acciones para poder establecer quienes han sido víctimas de tortura y prisión política, durante el régimen militar, para poder, precisamente, tratar de efectuar las reparaciones que en Derecho corresponden, bajo un procedimiento administrativo más simplificado y que opera bajo el principio de la buena fe, evitando la judicialización del establecimiento de la calidad de víctima de violación a los derechos humanos.

**DÉCIMO CUARTO:** Que sin perjuicio de lo anterior, la interpretación sistemática de las normas dispuestas por las Leyes 19.123 y 19.992, permite deducir que la bonificación de reparación instaurada en favor de ciertos familiares de ejecutados políticos y de víctimas directas de delitos de lesa humanidad, constituye un beneficio de carácter social, no una indemnización del daño moral sufrido por éstas, pues, en la determinación de su cuantía no se aprecia que se hayan considerado elementos particulares y/o personales de quienes soportaron dicho sufrimiento; requisito esencial a la hora de fijar una indemnización que no puede ser entendida sino con la finalidad de reparar o compensar un perjuicio cierto y determinado, no existiendo una incompatibilidad entre dichas compensaciones y aquellas que legítimamente y por vía jurisdiccional pretendan las víctimas, cuando se aprecie la existencia de un daño que no ha sido reparado íntegramente.

En consecuencia, las Leyes 19.123, 19.992 y 20.874, no pueden substituir la pretensión de compensación del daño moral soportado por el actor, añadiéndose que los beneficios conferidos



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XCNNXLWXNCX



«RIT»

Foja: 1

por dichas normas sólo apuntan a edificar políticas asistenciales del Estado, respecto de los familiares de las víctimas o de ellas mismas, sujetas a condiciones objetivas, lo que evidencia que no se trata de una reparación total y efectiva del daño sufrido por las víctimas.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, como consecuencia de lo razonado en las motivaciones anteriores, deberá acogerse parcialmente la excepción de reparación integral, deducida por la demandada, por haber sido ya indemnizada de manera objetiva el actor en virtud de ello, en los términos expuestos precedentemente, considerándose dicha reparación solo con la finalidad de determinar el quantum del monto a indemnizar por daño moral.

**DÉCIMO SEXTO:** Que, sin perjuicio de lo referido precedentemente, deberá determinarse, a continuación, si se dan los presupuestos de derecho para poder acoger la excepción de prescripción opuesta, en forma subsidiaria.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Respecto a la prescripción de la acción en materia de derechos humanos se debe considerar, que el sistema de responsabilidad del Estado deriva de los artículos 6° inciso tercero de la Constitución Política de la República y 3° de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, preceptos que, de aceptarse la tesis de la defensa, quedarían sin aplicación, siendo obligatoria su observancia, que por su parte los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por ilícitos de esta clase, queda sujeta a las reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas, ni hacer primar el derecho interno, dado que ilícitos imputable a un Estado, surgiendo de esa forma la responsabilidad internacional de éste por la violación de una normas de Derechos



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XCNNXLWXNCX

«RIT»

Foja: 1

Humanos y como consecuencia nace el deber de reparación y de cesar los actos de vulneración denunciada.

De esa forma las normas de rango superior imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales de justicia, en tanto éstos no pueden interpretar los preceptos de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de Derecho Internacional que consagran el derecho a la reparación, pues ello comprometería la responsabilidad internacional del Estado de Chile, ya que, el Derecho Internacional, traducido en Convenios y Tratados disposición constitucional, son vinculantes, como ocurre con la propia Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que, se hace necesario destacar que en los sucesos reseñados y que constituyen el fundamento de la acción, intervinieron agentes del Estado, lo que evidencia una contravención a lo preceptuado en el artículo 6° de la Constitución Política de la República, que obliga a los órganos del Estado a someter su acción a ella, a las normas dictadas conforme a la misma y al artículo 5° de nuestra Constitución, en cuanto el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; siendo deber de aquellos respetar y promover tales derechos garantizados. Esta última disposición constitucional hace posible incorporar al derecho nacional las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales, tales como la de indemnizar



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XCNNXLWXNCX

«RIT»

Foja: 1

íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos, la que, en consecuencia, adquiere rango constitucional.

Así las cosas al tratarse el presente caso de una demanda civil que se sustenta en un delito que, de acuerdo a la conciencia jurídica se denomina de “*lesa humanidad*”, se puede concluir que tal calificación no sólo trae aparejada la imposibilidad de amnistiar el ilícito y declarar la prescripción de la acción penal que de él emana, sino que también implica la inviabilidad de proclamar la extinción, por el solo transcurso del tiempo, del derecho de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada del delito cuya existencia ha sido pacífica, de forma tal que este tipo de ilícitos, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna.

**DÉCIMO NOVENO:** Que, conforme lo señalado, se concluye que procede de la indemnización que se reclama, atendiendo al contexto en que se verificó el delito, esto es, en un momento de extrema anormalidad institucional, en que los hechos -agentes del Estado- en representación del gobierno de la época, como quedó asentado en el proceso, ejecutaron ilícitos de tal gravedad, que imponen al Estado de Chile la obligación de resarcir el daño causado, tal como se desprende del bloque normativo integrado, entre otros, por el Reglamento de La Haya de 1907, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Resolución 2005/35, de 19 de abril de 2005 de la Comisión de Derechos Humanos, que en su conjunto consagran el derecho a buscar y conseguir plena reparación, incluida la restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición, imponiendo tal resarcimiento al respectivo Estado que ha violado los derechos humanos de sus ciudadanos.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XCNNXLWXNCX

«RIT»

Foja: 1

Sin perjuicio de lo anterior, ahora cabe determinar el *quantum* del detrimento resultado de los agentes del Estado, a lo cual se considera lo complejo de su determinación, dado que ningún monto podrá resarcir completamente a la ofendida, ni restablecerla a la situación anterior al acaecimiento de los hechos.

Sin embargo la indemnización por daño moral es meramente satisfactoria, lo que viene a significar que con ella se pretende una ayuda o auxilio que le permita a la víctima atenuar el daño.

**VIGÉSIMO:** Que, en relación con lo anterior, ha quedado demostrado que el actor, don *Rubén Eugenio Segundo Monsalve Lagos*, fue víctima de violaciones a los derechos humanos, puesto que sufrió privación ilegítima de libertad y torturas por razones políticas, perpetrada por agentes del Estado, en los términos y magnitudes que se consignaron en éste fallo. Luego, la pretensión indemnizatoria, claramente deriva de los padecimientos físicos y emocionales que ha tenido que sobrellevar; hechos que además, no han sido objeto de contradicción, dando cuenta del estrés post traumático de carácter grave y extenso que afecta al actor, alteraciones en su salud mental producto de los acontecimientos que debió enfrentar como víctima de prisión política y tortura; y por lo tanto, conforme a la experiencia científica, los menoscabos permanentes en la salud mental y física de las víctimas de este tipo de ilícitos.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que, con todo lo señalado, la cuantificación del daño se hará prudencialmente por el tribunal, habida consideración la naturaleza, entidad y extensión del mismo, teniendo para ello especialmente presente, las circunstancias en que se produjeron los hechos, la edad del actor a la época en que fue detenida e ilegítimamente apremiado; la duración y entidad de los padecimientos físicos y emocionales sufridos; y los montos



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XCNNXLWXNCX

«RIT»

Foja: 1

judicialmente asignados tanto a las víctimas directas de violaciones a los derechos humanos en causas similares, como a los hijos y padres de ejecutados políticos.

La suma que se fijará a título de indemnización, deberá pagarse reajustada de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha que la presente sentencia quede ejecutoriada y su pago; así reajustada, devengará intereses corrientes para operaciones reajustables en el mismo lapso.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que la demás prueba rendida, no detallada o considerada en forma especial, en nada incide en lo asentado precedentemente.

**VIGÉSIMO TERCERO:** Que en cuanto a las costas de la causa cada parte soportará las propias, en razón de no haber resultado totalmente vencida la demandada.

Por estas consideraciones, normas citadas, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 160, 170, 254 y siguientes, 342, 399, 426 del Código de Procedimiento Civil; 1°, 4°, 6°, 7°, 19, 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República; 1, 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 4.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1° de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 6, 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas; La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; Los Convenios de Ginebra de 1949; Principios de Núremberg; y art.7° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se declara:

**I.- Se acoge parcialmente** la excepción de reparación integral del Estado, en los términos analizados en el motivo décimo quinto.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XCNNXLWXNCX

«RIT»

Foja: 1

**II.-** Se **rechaza**, la excepción de prescripción interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado.

**III.-** Que **se acoge**, la demanda deducida en lo principal del escrito de 1 de mayo de 2023, al folio 1, y se condena al demandado a pagar al actor, don *Rubén Eugenio Segundo Monsalve Lagos*, la suma de **\$20.000.000** (veinte millones de pesos) por concepto de indemnización de perjuicios, a título de daño moral.

**IV.-** Que cada parte soportará sus costas.

Anótese, regístrese y notifíquese.

Pronunciada por doña **Cecilia Pasten Pérez**, Juez Suplente. /dbh

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, treinta y uno de Enero de dos mil veinticuatro**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XCNNXLWXNCX